CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

**TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA**

Barranquilla, Julio Dieciocho (18) de Dos Mil Veintitrés (2023).-

**MAGISTRADA SUSTANCIADORA: DRA. CARMÍÑA GONZÁLEZ ORTIZ.
APROBADA MEDIANTE ACTA No. 082.-**

Procede la Sala Quinta de Decisión Civil – Familia a resolver la Impugnación presentada contra el proveído de fecha junio 02 de 2023, proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD ATLÁNTICO dentro de la Acción de Tutela, instaurada por el señor BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA en contra del JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO ATLANTICO por la presunta vulneración a su derecho fundamental al Debido Proceso.

A N T E C E D E N T E S

Narra el accionante que fue demandado, mediante proceso Ejecutivo de Mínima cuantía, en solidaridad con el señor ORLANDO JULIO ARAUJO PEDRAZA, por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENDEDORES DE MUEBLES "COOLUGOMAR", mediante apoderado judicial correspondiéndole por reparto al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo, el cual fue radicada con el No. 08433-40-89-003-2021-00377-00, por cuantía de (\$7.788.000), representada en letra de cambio No. 33821 en fecha agosto veintiséis (26) de 2016, pactado a veinticuatro instalamentos mensuales con vencimiento de tracto sucesivo por un valor de cada uno de (\$324.500), hasta el 28 de septiembre de 2018.-

Que a la fecha de la presentación de la demanda no hubo abonos ni a capital ni a intereses, que se pactaron en un dos por ciento (2%), en el numeral cuarto del acápite de las pruebas se dejó claro que: "El demandado no obstante a la intensa labor de cobro por parte de su representada y no allanándose a la misma.-

Que la letra No. 33821 por SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.788.000.00 M/C), en original, nunca fue presentada al Despacho que conoce del proceso, tampoco fue solicitada por el Juez Tercero Promiscuo de Malambo, para el cotejo de huellas que planteó dentro de las excepciones de mérito propuestas, por el apoderado del demandado, Doctor LUIS MIGUEL VENTURA HERRERA.-

Que, dentro de la oportunidad procesal para ello, una vez surtido el trámite de las notificaciones a los demandados, mi apoderado judicial, propuso excepciones de mérito por considerar que la obligación no era clara, tampoco era exigible, solicitó se allegara el título original para el cotejo de huellas,

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

pero esto no se dio, porque el despacho desestimó esta práctica, la desestimó porque consideró que sí estaban colmados los presupuestos que exige el Código del Comercio.-

Que inicialmente hablan de la obligación de pagar una suma de dinero por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7788.000.00 M/C), pero esta surge, según se desprende del interrogatorio de la Representante legal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENDEDORES DE MUEBLES "COOLUGOMAR", señora CLAUDIA ESTELA MARQUEZ CARREÑO, de cuya actuación, se deja constancia, que dentro del proceso, no hay constancia y no existe certificado de existencia y Representación donde se demuestre que esta señora sea realmente la representante legal de la entidad demandante y tampoco se acompañó este documento al poder otorgado, lo que no fue objeto de examen por el despacho, no obstante a ello, fue citada a declarar y nunca demostró con documentos allegados al proceso su calidad.-

Que en su declaración indica que la obligación surge de refinanciar dos deudas que tenía el señor BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA, con la Cooperativa y de la consignación de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.000.000.00 M/C), que se le hizo a la cuenta de ahorro personal No. 026670169437 de DAVIVIENDA, en fecha agosto veintiséis (26) del dos mil dieciséis (2016), lo cual no es coherente con lo indicado por el apoderado de la sociedad, si nunca pudo ser localizado.-

Indica que otro punto que vulnera el Debido Proceso, es, que para esa fecha, ya esa cuenta de ahorro, fue cancelada, toda vez, que esta, fue reemplazada por la No. 02800051228 cuya apertura fue el veinticinco (25) de junio del dos mil dieciséis (2016), esto está sustentando con las certificaciones expedidas por el Banco DAVIVIENDA, relacionadas en el acápite de las pruebas de esta acción, luego entonces no es claro de donde salió la suma reclamada, por qué, si el demandado señor BLAS MORENO ORTEGA, incumplió las obligaciones, como pueden hacerle un préstamo por una suma de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.00 M/C) lo que nunca, fue retirado por este y por ello se solicitó la exhibición del título en la etapa probatoria e instrucción, para las verificaciones que se plantearon en las excepciones de mérito, que la JUEZ TERCERA PROMISCOUO MUNICIPAL DE MALAMBO, omitió solicitar y con lo cual, se vulneró de manera flagrante el derecho al Debido Proceso.-

Que se solicitó el interrogatorio al demandado solidario señor Orlando Julio Araujo Pedraza quien no compareció al proceso para lo cual le fue designado curador ad-litem, y ante la necesidad de la prueba hubo que desestimarla y el despacho continuó con la ejecución, siendo que la razón de la prueba de interrogatorio al deudor solidario es que el señor Blas Moreno Ortega, no

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

conoce ni de trato ni de vista al referido señor y no entiende como pudo ser deudor solidario en esa obligación.-

Manifiesta que están latentes las vulneraciones a sus derechos fundamentales, porque si bien, hubo las oportunidades para defensa, no es menos cierto que hubo limitaciones y más aún cuando de la exhibición del título valor que dio lugar a la demanda y posterior mandamiento, se basó la contestación interposición de EXCEPCIONES DE MERITO, que buscaban demostrar que la huella dactilar y firma estampada en el título resultaban dudosas y solo se podía comprobar su autenticidad a través de un experticio pero reitero, el despacho omitió solicitar que se allegara el título valor letra de cambio No. 33821, vulnerando el derecho a la práctica de pruebas como un elemento del Derecho de Defensa y del Debido proceso, así como el Derecho a la igualdad de ser tratados de manera neutral a las partes para lograr un equilibrio de la eficaz y real administración de justicia.-

P E T I C I Ó N

Pretende la Accionante que se tutelen los derechos fundamentales, y, en consecuencia:

PRIMERO: SE TUTELEN mis derechos fundamentales invocados de DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL Y VIDA DIGNA, PROTECCION AL ADULTO MAYOR E IGUALDAD que me han vulnerado.

SEGUNDO: SE ORDENE al JUEZ TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO ATLANTICO, para que en término de ley informe las razones para continuar el curso del proceso Ejecutivo, cuyo fundamento de la obligación es la Letra No. 33821 por SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.788.000.00 M/C), que nunca fue allegada al despacho para que durante la etapa probatoria de las excepciones propuestas se procediera a realizarse el experticio solicitado por el apoderado del demandado y que ante esta omisión se dio por surtida la diligencia por parte del Juzgado, sin poder ejercer el Derecho de Defensa que le correspondía a mi mandante, de verificar si esa era su firma y huella, manifestación que hago según el dicho de mi mandante y en su nombre, quien indica que si bien se accedió a la apertura de pruebas, nunca se allego el título de recaudo al proceso y de esta forma, continuo el curso del mismo afectando derechos propios y de terceros y cese todo acto de vulneración de mis Derechos fundamentales.

TERCERO: SE ORDENE al Juez Tercero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), decretar la nulidad de lo actuado desde el auto que ordenó la apertura a pruebas dentro de las excepciones de mérito, propuestas por el apoderado de la parte demandada Doctor LUIS MIGUEL VENTURA HERRERA,

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

en su oportunidad procesal para ello, por evidente violación al Debido proceso.-

La presente tutela fue conocida en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD, quien decidió DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales del accionante, decisión que fue impugnada, por lo que se procederá previo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política en su artículo 86 y el Decreto 2591 de 1991, consagran y desarrollan la Acción de Tutela como el mecanismo constitucional de naturaleza subsidiaria de protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente, de actos u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares en los casos previstos por la ley. La cual sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

Según el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos fundamentales. También procede contra acciones u omisiones de particulares. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito.

El argumento sobre el cual se basa la inconformidad del accionante radica en que considera que el juzgado accionado ha vulnerado su derecho fundamental al Debido Proceso al haber declarado no probadas las excepciones de mérito propuestas y haber ordenado seguir adelante la ejecución en contra del demandado.

Al respecto, se pronunció el JUZGADO TERCERO PROMISCO MUJICIPAL DE MALAMBO, manifestando lo siguiente:

"Dando cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Soledad, en auto calendarado 19 de mayo de 2023, notificado a éste despacho el 23 de mayo de 2023, a las 11:26 am, procedo a rendir el informe solicitado dentro del término ordenado, de la siguiente forma:

1.- A éste Despacho le correspondió por reparto efectuado el dos (02) de septiembre de 2021 el conocimiento del proceso ejecutivo singular, radicado bajo el número 08433-40-89-003-2021-00377-00 , instaurado por COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENDEDORES DE MUEBLES COOLUGOMAR, a través de apoderado judicial, contra BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA Y ORLANDO JULIO ARAUJO PEDRAZA

2.- Desplegado el trámite procesal correspondiente, mediante auto de fecha 27 de septiembre de 2021, se ordenó librar orden de pago, ordenando surtir la notificación

conforme lo prevé los artículos 291 y 292 del C.G.P y decretando la medida cautelar consistente en el embargo y retención de la quinta parte del 25% de la mesada pensional y demás emolumentos embargables que recibían los señores BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA Y ORLANDO JULIO ARAUJO PEDRAZA identificados con la cédula de Ciudadanía No 831.295 y 7.483.674 respectivamente, en calidad de pensionados de la ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

3.- En fecha 25 de Octubre de 2021, se le notifica al señor Luis Miguel Ventura Herrera identificado con c.c.9.094.795 en calidad de apoderado de la parte demandada BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA del auto de fecha 27 de septiembre de 2021, se envió traslado de la demanda y auto de mandamiento de pago, quien presentó excepciones a través de apoderado judicial en fecha 09 de noviembre de 2021 a las cuales se corrió traslado mediante auto de fecha Junio Veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022).

4.-En cuanto al otro demandado, señor ORLANDO JULIO ARAUJO PEDRAZA, previa solicitud del apoderado judicial de la parte demandante, mediante auto de fecha Marzo 16 de 2022, se ordenó el emplazamiento por no surtirse la notificación personal y por aviso, surtido el trámite de rigor, mediante auto de fecha Mayo 10 de 2022, se le designo curador ad litem, nombrando a la DRA. MAYDA VALENCIA NUÑEZ, quien tomo posesión, contestando la demanda, sin proponer excepciones.

5- Estando las partes procesales integradas y fenecido el término de traslado de la contestación de la demanda se fijó fecha para celebrar la audiencia prevista en el art 372 y 373 mediante proveído fechado 23 de septiembre de 2022, fijándose para el día el día 26 de octubre de 2022, a las 10-00 am, la cual no se pudo realizar y se tuvo que reprogramar por que el despacho tuvo que atender una audiencia de control de garantías (Penal), se fijó como nueva fecha para continuar con la celebración de la audiencia de trámite en oralidad prevista en el art 372 y 373 para el día 21 de noviembre de 2022, a las 9.30 de la mañana, la cual tampoco se llevó a cabo por inconvenientes en la conexión del apoderado del demandado BLAS MORENO ORTEGA, el doctor LUIS MIGUEL VENTURA HERRERA y para preservar la comparecencia de todos los intervinientes y el derecho a la defensa y contradicción se reprogramo la misma para el día 02 de Diciembre de 2022, comenzando la misma a la 10:30 am

6.- La audiencia llevada a cabo el día 02 de diciembre de 2022, comparecieron la parte

Demandante: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENDEDORES DE MUEBLES COOLUGOMAR, mediante su representante legal CLAUDIA MARQUEZ. El Apoderado parte demandante: JULIO CESAR HERRERA. La Curadora ad litem: MAYDE VALENCIA en representación del demandado ORLANDO JULIO ARAUJO PEDRAZA, el Apoderado de la parte Demandado BLAS MORENO: LUIS MIGUEL VENTURA HERRERA, la cual se desarrolló en todas su etapas procesales, escuchando a las partes y practicando las pruebas solicitadas y las que fueron decretadas.

7.- Surtida la misma se declaró no probadas las excepciones de mérito propuesta por el señor BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA a través de apoderada, como fueron la FALTA DE REQUISITO DE CLARIDAD Y VALOR DEL TÍTULO EJECUTIVO - y de tacha de falsedad en la letra de cambio y carta de instrucciones por irregularidades e inconsistencias. y 2. Se ordenó seguir adelante la ejecución en contra de los señores BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA Y ORLANDO JULIO ARAUJO PEDRAZA, por la

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

suma de SIETEMILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L (\$7.788.000,00), por concepto de capital contenido en la letra de cambio No. 33821 más los intereses corrientes generados desde el 26 de agosto de 2016 hasta el 28 de septiembre de 2018, más los intereses moratorios generados desde el 29 de septiembre de 2018 hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. Esto en consideración que la parte actora no probó que efectivamente la suma señalada no era y porque el despacho considero el hecho que la carta de instrucción se indicara 26 de agosto de 20016. Ese cero de más no le quitaba claridad del título, máximo cuando en el titulo valor señala que se creó el 26 de agosto de 2016. Amen de no haber probado lo que afirmo en las excepciones.

8.- Además de lo anterior, el accionante presento una tutela por los mismos hechos le correspondió al juzgado primero civil del circuito de soledad, la cual fue impugnada y le correspondió a la Sala primera de familia. Ver en la carpeta cuaderno (4)

En resumen se tiene que de las anteriores actuaciones procesales fueron en derecho, es de anotar que el hoy accionante de la presente tutela, se le respetaron todas las garantías procesales y las oportunidad procesal para hacer valer sus derechos, el juzgado al momento de proferir el auto de seguir adelante la ejecución en la audiencia de fecha 02 de diciembre de 2022 no le otorgo la razón fundamentada derecho, pues la tesis planteada no desvirtuó la veracidad y credibilidad de la exigibilidad del título valor, letra de cambio aportada en la demanda, Para el despacho era claro la fecha del título y que el mismo cumplía con los requisitos de ley, literalidad de los títulos ejecutivos y el demandado no allego prueba alguna que pudiera desvirtuar que lo consagrado en el titulo valor no eran las firmas de los deudores y que ese no era el valor pactado, lo cual si se corrobora con los interrogatorios de donde se originó la obligación".

Asi mismo también se pronunció COOPERATIVA COOLUGOMAR EN LIQUIDACION por medio de su representante legal, manifestando lo siguiente:

"Que dentro del proceso ejecutivo 2021-000377-00 se libró mandamiento ejecutivo de pago por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo - tal y como lo dispone el Artículo 430 CGP para recaudar obligación por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENNTA Y OCHO MIL PESOS M/L (\$ 7.778.000) a favor de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENDEDORES DE MUEBLES "COOLUGOMAR" aceptada el veintiséis (26) de agosto del año 2016, para ser cancelados mediante veinticuatro (24) instalamentos mensuales con vencimiento tracto sucesivo por un valor de TRECIENTOS VENTICUATRO MIL PESOS ML (\$ 324.000.) cada una.

Que el tipo de título valor adosado como soporte de la ejecución, es una letra de cambio con espacios en blanco y suscrito por el deudor el cual fue ultimado por el demandante conforme a las instrucciones impartidas literal y expresamente en el documento Carta de instrucciones otorgada al momento de celebrar el crédito en sus términos y condiciones, Faculta "a la Cooperativa Coolugomar "para efectuarlo sobre el referido título Valor letra de Cambio No. 33821.

Realiza una exposición de las actuaciones surtidas al interior del proceso e indica que la operadora judicial accionada analizó el acervo probatorio, ordena alegatos y decide de acuerdo a las pruebas allegadas al proceso, ordena seguir adelante la ejecución, sentencia contra los ejecutados una vez argumentado su decisión basada en un examen crítico de las pruebas allegas al proceso, articulo 280 CGP más probar que

existe mérito del instrumento ejecutivo (letra de cambio) al cumplimiento de las disposiciones y requisitos legales establecidos en los artículos 422 del C.G.P.

Manifiesta la improcedencia de la acción de tutela, frente al principio de subsidiariedad e inmediatez y que en el caso concreto los hechos relacionados en la acción de tutela motivo de la presunta vulneración de derechos Constitucionales del accionante fueron presentados como excepciones o recursos dentro de lo términos señalados en el CGP, son hechos resueltos en virtud del acervo probatorio y decantado en cada etapa procesal, concediendo oportunidades al accionantes, antes demandados para que en audiencia interrogatorio y a través de los medios exceptivos y ordinarios con los que contó dentro del proceso ejecutivo pudo ejercer su derecho a la defensa de pedir y aportar pruebas, lo cual fueron resueltos en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2022.

Sostiene que los demás, son hechos nuevos aducidos en la acción de tutela constituyen excepciones o recursos que debió presentar dentro de cada término procesal dentro del proceso de ejecución, para ello o bien pudo solicitar aclaración o complementación de la sentencia artículo 285 de la ley 1564 de 2012, y no solicitar la protección constitucional al debido proceso, cuando no fueron hechos esgrimidos dentro de su perentorio termino procesal.

Que además emerge la improcedencia de la solicitud de amparo tutelar, al no encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad, dada la naturaleza de la acción como mecanismo subsidiario y residual, máxime, cuando no se ha demostrado la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la protección, por lo que solicita se declare la improcedencia de la acción invocada”.

El A-quo, decidió declarar la improcedencia de la presente acción de tutela, argumentando lo siguiente:

"Revisado el expediente ejecutivo radicado No. 2.021-00377-00, del cual da cuenta esta tutela, y que fuera remitido por el Juzgado accionado para efectos de realizarle una inspección, encuentra el despacho, que la queja constitucional se presenta frente a la decisión final (sentencia) proferida dentro de un trámite de un proceso ejecutivo de mínima cuantía y por tanto de única instancia, en ese orden, contra dicha providencia no procede recurso de reposición, ni de apelación, por tanto, se podría considerar que en principio se encuentra agotado el requisito de subsidiariedad o residualidad.

No obstante, los hechos dan cuenta, que lo que echa de menos el accionante, es que el Despacho en desarrollo del trasegar procesal correspondiente no decretó las pruebas que había solicitado para resolver las excepciones de mérito formuladas.

Pues bien, del escrutinio procesal realizado al expediente, se evidencia que mediante auto de fecha 26 de octubre de 2022, se convocó para la evacuación de las audiencias de que tratan los artículos 372 y 373 del CGP en audiencia concentrada por ser un proceso ejecutivo de mínima cuantía que debe realizarse en una sola conforme al artículo 392 ibidem.

En ese proveído se decretaron las pruebas que el juzgado estimó procedentes y denegó otras. El auto por medio del cual se convocó a audiencia y se pronunció en relación con el decreto de pruebas no se interpuso recurso de reposición, medio de impugnación que le era oponible; así tampoco se solicitó adición o complementación del auto en las pruebas que se echaban de menos conforme a lo afirmado por el accionante.

Igualmente, en el curso de la audiencia el Juez adoptó algunas decisiones que se notificaron por estrados y tampoco fueron atacadas, por lo que en ese sentido, encuentra el Despacho que el requisito de subsidiariedad frente a las previas determinaciones del Juzgado no se superó pues, se itera que el accionante a través de su apoderado no recurrió.

Siendo ello así, deviene improcedente el ejercicio del amparo constitucional de derechos fundamentales, porno agotamiento del requisito de subsidiariedad.

En ese orden, tuvo la oportunidad procesal, para ejercer los medios de impugnación que le eran oponibles a las decisiones proferidas; pues, si bien es cierto que el proceso ejecutivo es de mínima cuantía, no es menos cierto que el apoderado ejecutado no interpuso ningún recurso en contra de las decisiones allí proferidas, pretendiendo por medio de la acción constitucional, revivir términos ya fenecidos.

De lo expuesto en conjunto con los hechos de tutela, se puede concluir que el aquí tutelante y demandado dentro del proceso ejecutivo no agotó los medios ordinarios de defensa con los que contaba para ventilar sus inconformidades al interior del proceso ejecutivo, sino por el contrario, se pretende a través de este mecanismo constitucional, hacer valer nuevos argumentos que no se adujeron en su oportunidad o de conformidad a las ritualidades exigidas por la Ley.

En ese sentido, no le es permitido a la accionante acudir en tutela, sin demostrar que agotó la totalidad de los recursos y demás mecanismos que el ordenamiento jurídico ha puesto a su disposición, dado que acudir de forma directa a la acción de tutela, la desnaturaliza, pues, se desconoce su carácter subsidiaria y residual.

Como es sabido, la acción constitucional no puede erigirse en instrumento supletorio para sustituir procedimientos legalmente establecidos y atendiendo lo expuesto se deberá declarar improcedente la presente acción de tutela, al no cumplirse en su totalidad los requisitos de procedibilidad formal de la acción de tutela”.

La Corte, en la sentencia C - 590 del 8 de junio de 2005, hizo alusión a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de procedencia estableció:

"Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela.

De otro lado, tenemos las causales o requisitos especiales que se requieren para que una tutela contra sentencia judicial sea procedente. Así pues, se requiere que se configure, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se determinan:

a. Defecto orgánico. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto. Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico. Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo. Son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales. O que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido. Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación. Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos..."

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

Aplicando el precedente constitucional, se tiene que en cuanto a los requisitos de procedibilidad generales:

a.- El tema de discusión es evidente que tiene relevancia constitucional al tratarse de la garantía del derecho fundamental al debido proceso, pilar que debe guiar todos los procedimientos relacionados con la Administración de Justicia.-

b.- El Accionante no tiene a su disposición otro mecanismo, ya que contra la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, de fecha 2 de diciembre de 2022, no procede recurso alguno, por tratarse de un proceso ejecutivo de mínima cuantía.-

c.- Se cumple el requisito de inmediatez, ya que la decisión es de fecha 2 de diciembre de 2022.-

d.- Existe claridad en relación con la irregularidad procesal alegada como constitutiva de vía de hecho.-

e.- Se encuentran identificados de manera razonable los hechos que generan la vulneración.-

f.- No se trata de una sentencia de tutela.-

Estando reunidos los requisitos de procedibilidad generales, se procederá al estudio de los requisitos de procedibilidad especiales.-

En el presente caso, alega el impugnante:

a.- Que la Juez Accionada no surtió el control de legalidad solicitado por su apoderado judicial, no cerciorándose la falta de personería que le asistía a la representante legal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA COOLUGOMAR, al no allegarse al proceso el certificado de existencia y representación donde consta su designación como representante legal de la sociedad y a pesar de ello fue admitida.-

Si bien al momento de presentarse la demanda, no se anexó el certificado de existencia y representación de la entidad demandante, el demandado aquí accionado, no utilizó el mecanismo establecido en el Código General del Proceso, de haber alegado la excepción previa señalada en el numeral 6° del artículo 100 del mencionado estatuto procesal, de no haberse presentado prueba de la calidad con la que estaba actuando la demandante. Así mismo, se tiene que en el expediente digital, aparece el certificado de existencia y representación de la COOPERATIVA COOLUGOMAR, del cual se desprende que la señora CLAUDIA MARQUEZ CARREÑO, es la representante legal desde el 15 de mayo de 2018.-

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

b.- El título de recaudo se allegó virtualmente y bajo juramento del apoderado de la COOPERATIVA COOLUGORMAR, que no se usaría y se allegaría al proceso cuando la señora juez del caso lo solicitara, lo que nunca se dio, porque esta dio por hecho lo manifestado sobre el monto de la obligación y fecha de la misma, expresado bajo juramento por la supuesta representante legal de la Cooperativa, irregularidades que se surtieron antes de la admisión.-

Al respecto, se trae a colación la sentencia STC2392-2022, del 3 de mayo de 2022, M.P. OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE, en la cual señala:

*"En definitiva, **quien pretenda la ejecución de un documento físico que preste mérito ejecutivo deberá digitalizarlo y adjuntarlo a su demanda.** También deberá manifestar que conservará su tenencia y que lo custodiará hasta el momento en que se realice el respectivo pago, momento en el que lo entregará a quien honre la prestación. Lo anterior **sin perjuicio de que deba exhibirlo presencialmente -con el fin de garantizar el trámite de las eventuales defensas expuestas- a quien corresponda, por orden del juez, a petición del ejecutado, y dentro del término y forma que la autoridad judicial estime necesario.** Lo anterior, como se dijo, bajo pena de que se frustre la aspiración judicial de pago ante la falta de tenencia del instrumento originario del crédito."*-

Teniendo en cuenta el anterior precedente, si procede haberse seguido la ejecución de un documento físico que preste mérito ejecutivo, digitalizado como fue aportado dentro de este proceso, sin perjuicio de exhibirlo presencialmente.-

Al momento de presentar las excepciones de mérito, la parte demandada no solicitó la exhibición de la letra de cambio, base del proceso ejecutivo a que se contrae esta acción. Lo solicitado por el apoderado judicial de la parte demandada, fue la exhibición de las libranzas que fueron firmadas por el demandado y que dieron lugar a la creación de la letra de cambio.-

Así mismo, se tiene que al momento de decretarse la etapa probatoria, la Juez Accionada, no accedió a decretar las pruebas solicitadas por la parte demandada, con excepción de la declaración del señor ORLANDO JULIO ARAUJO PEDRAZA, la cual no se llevó a cabo, por no conectarse el testigo, y estando presente en la audiencia el apoderado judicial de la parte demandada, no interpuso recurso alguno contra dicha decisión, como era el recurso de reposición. Por lo que no procede que el demandado alegue vulneración alguna, cuando su apoderado judicial, estuvo conforme con dicha decisión.-

Ahora bien, analizada la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2022, observa la Sala que por estar edificada en las expresadas reflexiones, prescindiéndose desde el plano estrictamente legal, si las mismas se comparten o no, no puede tildarse de caprichosa o arbitraria, y por tanto, no se hace necesaria la intervención del Juez Constitucional, ya que de otra manera se estaría interfiriendo la esfera de juzgamiento propia de los jueces naturales, labor, que a partir del desarrollo de los principios de autonomía y de la independencia judicial, también tienen protección en la Carta Política.-

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

Por lo que analizada la actuación de la Juez Accionada, no se presenta ningún defecto de los señalados, para concluir que se ha incurrido en una vía de hecho, a saber:

Defecto orgánico, no se presenta por cuanto el Juzgado accionado es el competente para decidir acerca del asunto.-

Defecto procedimental, no se presenta, por cuanto el Juzgado accionado ha actuado de acuerdo al procedimiento establecido para ello.-

Defecto fáctico, no se presenta, ya que del material probatorio advirtió la Juez Accionada, que no se encontraban demostradas las excepciones de mérito invocadas, por las que declaró no probadas y ordenó seguir adelante la ejecución.-

Defecto material o sustantivo, no se presenta, por cuanto se decidió con base en normas existentes y constitucionales, y no se presenta una grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.-

Error inducido, no se evidencia que la Juez Accionada haya sido víctima de un engaño que la condujo a la toma de la decisión.-

Decisión sin motivación, no se presenta, ya que la providencia de fecha 2 de diciembre de 2022, se encuentra debidamente motivada, y en ella reposa la legitimidad de su órbita funcional.-

Desconocimiento de precedente, no se presenta en el caso que nos ocupa, ningún desconocimiento de precedente de la Corte Constitucional.-

Al no configurarse ninguna de las causales o requisitos especiales, resulta entonces, claro para la Sala, que el Accionante pretende a través de esta acción, revivir el debate propuesto dentro del proceso a que se contrae la misma, al serle desfavorable la decisión proferida por la Juez Accionada, desconociendo el carácter residual y subsidiario que tiene esta acción, por lo que en este aspecto no procede conceder el amparo invocado, por ende se confirmará la providencia impugnada, en este sentido.-

Por último, alega el Accionante, que no se resuelve la solicitud del remanente, que aún le siguen vulnerando sus derechos, sin que la Juez Accionada se pronuncie al respecto.-

Revisado el expediente digital, se observa que el apoderado judicial del demandado aquí Accionante el 23 de abril de 2023, presentó memorial denominado Concurrencia y Pago conjunto de la obligación, sin que a la

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

fecha se haya resuelto el mismo, por lo que se trae a colación la sentencia de la Corte Constitucional T-186 de 2017, que señala:

"MORA JUDICIAL-Definición

Se definió la mora judicial como un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos."-

"MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA-Circunstancias en que se presenta

Tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial."-

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley, sin que existe motivo razonable que justifique dicha demora, por lo que en este sentido, se concederá el amparo invocado, ordenándose al Dr. TOMÁS PADILLA PÉREZ, quién en la actualidad desempeña el cargo de JUEZ TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a resolver el memorial de fecha 23 de abril de 2023, presentado por el apoderado judicial del demandado BLAS MORENO ORTEGA, por lo que en este sentido se adicionará la providencia impugnada.-

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído de fecha junio 2 de 2023, proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD, en lo atinente a la improcedencia de la tutela en lo relativo al trámite procesal.-

SEGUNDO: ADICIONAR el proveído de fecha junio 2 de 2023, proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD, en el siguiente sentido:

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-758-31-12-001-2023-00240-01
RADICACIÓN INTERNA: T- 00368 - 2023.

2.1.- CONCEDER el amparo invocado por el señor BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA en contra del JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO, frente a la mora judicial.-

2.2.- En consecuencia, se ordena al Dr. TOMÁS PADILLA PÉREZ, JUEZ TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a resolver el memorial de fecha 23 de abril de 2023, presentado por el apoderado judicial del demandado BLAS ANTONIO MORENO ORTEGA.-

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma más expedita y comunicar esta decisión al Juez A-quo.-

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.-

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
CARMIÑA GÓNZALEZ ORTIZ
BERNARDO LOPEZ
SONIA ESTHER NORIEGA RODRIGUEZ**

Firmado Por:

Carmiña Elena Gonzalez Ortiz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 6 Civil Familia
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Sonia Esther Rodriguez Noriega
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 7 Civil Familia
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Bernardo Lopez
Magistrado
Sala 001 Civil Familia
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **260f4fe776a4b47379d409efb842879a6541e45a907af19571d08989388ae8e9**

Documento generado en 18/07/2023 02:14:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>